



INFORME: EL AGUA EN CLM

Las paradojas del agua

Alberto Gil

Periodista especializado en Medio Ambiente

De todos los recursos naturales, el agua es el que mejor ilustra la enorme complejidad de las relaciones entre el desarrollo económico y el medio ambiente. Pese a su carácter limitado, la demanda de agua ha ido creciendo al mismo ritmo que el proceso de industrialización, y la llamada sociedad del bienestar ha sido posible en buena parte gracias a la explotación sin trabas de este recurso. Paradojicamente, esa misma dependencia ha dado pie a la aparición del fantasma de la escasez y a la transformación del agua —en la provocativa expresión de Ivan Illich— «en una materia creada por la sociedad industrial» que reduce las posibilidades del elemento en estado puro.

El aumento de los regadíos y la consiguiente contaminación de las reservas subterráneas provocada por los nitratos, el alto consumo doméstico en un país de climatología seca, como España, la escasa depuración de los vertidos industriales y urbanos que van a parar a los ríos y la pérdida de calidad del agua embalsada, son algunos de los problemas derivados de una contradicción que, lejos de suavizarse, va adquiriendo nuevas facetas con el paso del tiempo.

En España, la prolongada sequía de los últimos años se ha convertido en un factor añadido y ya ha tenido graves consecuencias económicas. Sólo en la agricultura se estima que durante el pasado año hubo pérdidas superiores a los 300.000 millones de pesetas. Pero al margen de las épocas de adversidad, el campo ha utilizado el agua en exceso y aplicado técnicas de riego de dudosa rentabilidad. Según algunos informes, es habitual que en los regadíos se pierda más del 40 por 100 del agua en su trayecto hasta los cultivos. Es fácil calibrar el alcance de esta sangría si se tiene presente que en nuestro país, ocho de cada diez litros de agua van destinados a la agricultura.

Las pérdidas comparativas en consumo doméstico y en los usos industriales no andan a la zaga y aunque en el primero de los sectores se ha producido una considerable mentalización del ciudadano hacia el ahorro, en el caso de las industrias es todavía muy escasa la reutilización del agua y su tratamiento se considera como un pernicioso lastre que únicamente encarece los costes de producción.

Algo similar ocurre con la depuración del agua ya utilizada. La propia Memoria del Plan Hidrológico Nacional, presentado por el Gobierno, aprobado el pasado

año 1992, al referirse a la calidad del recurso, reconoce abiertamente que «la situación en España es más grave que en la mayoría de los países de la Comunidad Europea, no porque nuestros vertidos sean mayores o más contaminantes, sino porque estamos lejos de alcanzar los niveles mínimos de depuración de esos vertidos».

En las distintas Comunidades Autónomas los problemas de cantidad y calidad varían en función de las disponibilidades naturales, muy diferentes en el norte y en el sur, y de la presión de los tres sectores: urbano, industrial y agrícola, que también actúan de manera dispar en cada región pero siempre hacen notar su presencia con cierta dureza.

Calidad amenazada

Castilla-La Mancha no es una excepción a esta regla y como se puede observar en las siguientes páginas, sus dos grandes cuencas hidrográficas: Guadiana y Tajo, sufren esa paradoja que hace del agua un bien tan indispensable como escasamente protegido. En el caso del Guadiana, según hace constar el presidente de esa Confederación Hidrográfica, a la contaminación provocada por los pesticidas y los abonos, se suman los vertidos de algunas industrias agroalimentarias y las aguas sin depurar de numerosas poblaciones, algunas de ellas de suficiente entidad —Valdepeñas, Alcázar de San Juan, Tarancón, Almagro...— como para provocar un severo impacto. En el caso del Tajo se constata también una calidad muy deficiente del agua, aunque a veces se pueda achacar a los afluentes que atraviesan la Comunidad de Madrid.

Un caso singular es el de las aguas subterráneas. La sobreexplotación de los acuíferos en buena parte de La Mancha y particularmente en la cuenca alta del Guadiana, ha sido advertida reiteradamente por la administración y por los grupos conservacionistas, que ven en el uso abusivo de estas aguas la principal amenaza para la supervivencia de las zonas húmedas manchegas. El ejemplo más conocido es el de las Tablas de Daimiel, alimentadas en buena parte por el llamado «acuífero 23», cuya utilización masiva para regadíos ha convertido este humedal en una sombra de lo que —todavía a mediados de siglo— era un enclave ecológicamente privilegiado. Las lagunas de Ruidera también se están viendo mermadas por

el uso agrícola del acuífero que las sustenta, además de sufrir otra presión, la del turismo y las urbanizaciones, que suponen a la vez ingresos para la comarca y amenazas para sus mejores espacios naturales.

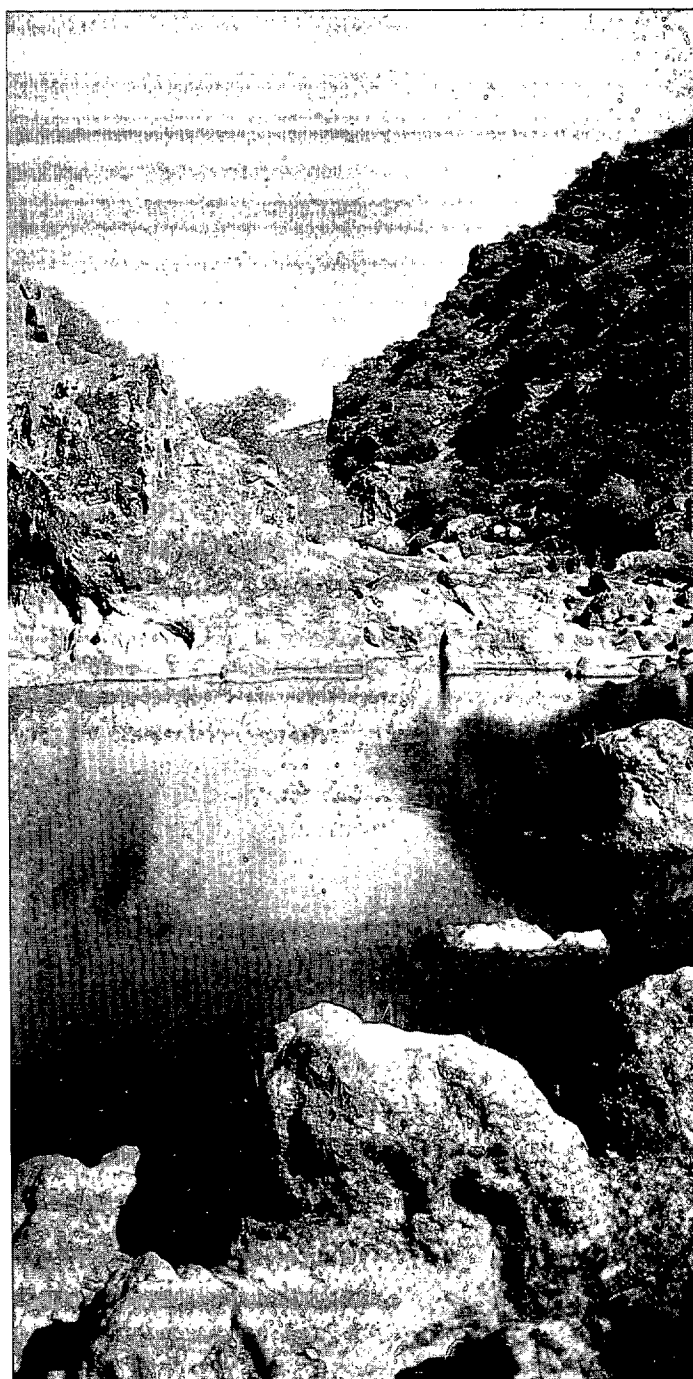
El Plan de Recuperación de Humedales, elaborado por el gobierno autónomo y aprobado por la Comunidad Europea, incide claramente en la necesidad de transformar los cultivos al prever compensaciones a los agricultores que disminuyan la superficie de regadío. Queda por ver cómo es acogido este plan por sus destinatarios y qué alternativas se vislumbran en un sector que soporta una crisis tan vieja como dolorosa.

Los conflictos entre lo ecológico y lo económico, es decir entre el agua como materia viva y promotora de vida, su utilidad económica y el coste que implica devolverla al estado natural una vez empleada y contaminada, son interminables y también deberían condicionar las grandes infraestructuras de almacenamiento y transporte, intentando limitar su impacto ambiental. La reciente constatación de que el embalse de Riaño no había cubierto sus objetivos después de que se construyera con notables repercusiones ecológicas y sociales, demuestra hasta qué punto la planificación hidrológica está aún llena de carencias.

Un Plan desarrollista

Precisamente la crítica más reiterada al Plan Hidrológico Nacional, que tendrá aún una larga andadura antes de entrar en vigor, se basa en que, por encima de todo, se trata de un programa de infraestructuras y obras públicas en el sentido clásico, es decir «desarrollista». Las inversiones en embalses y trasvases suponen más del 40 por 100 de los 3,6 billones de pesetas presupuestados para este gigantesco plan durante los próximos veinte años, frente a un modesto 9 por 100 destinado a depuración y un escasísimo 1,1 por 100 dedicado a investigación y desarrollo.

Al margen de que muchos de los embalses previstos han sido considerados, por parte de las organizaciones conservacionistas más solventes, como ambientalmente inadecuados —entre ellos cinco en Castilla-La Mancha— y al margen también de que no se ha evaluado el impacto de los trasvases previstos en este plan, la futura tendencia en la gestión del agua parece adolecer todavía de un exceso de tiralíneas y calculadora. El debate público y los matices que pueda aportar cada región deberían servir para corregir ese gravísimo error, incidiendo más en el ahorro del recurso y en su importancia ecológica a largo plazo. Sólo así se podrá alcanzar ese raro estado de equilibrio en el que la preservación del agua tenga al menos la misma consideración que su utilidad para cubrir los requerimientos inmediatos y responder a la demanda de la planificación económica pura y dura. ■



Manuel Ruiz Toribio